

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°029

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **CLAUDIA SANTACOLOMA OSORIO** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se declare la ineficacia de la afiliación al RAIS; y, en consecuencia, se indique que se mantuvo afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado por el **ISS** hoy **Colpensiones**.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a **Protección S.A.** a **Colpensiones** dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, la totalidad de las sumas que se encuentran depositadas en su cuenta de ahorro individual, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del Código Civil, es decir, incluyendo los rendimientos financieros. Así mismo, el traslado de los valores descontados por concepto de aportes a la garantía de pensión mínima, comisiones de administración con indexación y primas de seguros.

De otro lado, solicita que se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de vejez y los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; o en subsidio la indexación de las condenas.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que nació el **12 de noviembre de 1959** y fue afiliada Al sistema de pensiones a través del **ISS** hoy **Colpensiones** el **30 de junio de 1994**.

En el año 1999 se vinculó al RAIS administrado por **Protección S.A.**, luego de asesores comerciales de esta entidad le manifestaran que de trasladarse recibiría una mejor mesada pensional, sin que se le explicaran las características del régimen privado y sus principales diferencias con el RPM.

Respuesta Colpensiones

Colpensiones a través de apoderada manifestó que es cierta la fecha de nacimiento de la demandante y que estuvo afiliada a ese fondo, luego de lo cual se trasladó al RAIS, sin que le consten los pormenores de esta decisión.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, imposibilidad de reconocer pensión de vejez de forma retroactiva, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, presunción de legalidad de los actos jurídicos, buena fe, prescripción e inoponibilidad.

Respuesta Protección S.A.

Esta AFP por intermedio de apoderada manifestó que es cierto que la actora se vinculó a esa administradora, resaltando que esa entidad le brindó información clara, cierta y veraz a través de sus promotores, los cuales le indicaron los efectos y consecuencias del traslado.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos del sistema de general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, e Inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

Sentencia de primera instancia

La Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **29 de noviembre de 2022**, declaró la ineficacia de la afiliación al RAIS.

Como consecuencia de lo anterior, ordenó a **Protección S.A.**, que, en el término de 1 mes, contado a partir de la ejecutoria de la sentencia, traslade a **Colpensiones** los saldos de la cuenta de ahorro individual, con los rendimientos financieros, bonos pensionales que se encuentren o no en la cuenta de ahorro individual, en los periodos de afiliación, el porcentaje cobrado por comisiones, gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados y con cargo a sus propios recursos, durante el tiempo en que la demandante estuvo afiliada es esa administradora.

De otro lado, ordenó a **Colpensiones** activar la afiliación de la demandante y recibir todos los dineros que sean trasladados por **Protección S.A.**

Finalmente, declaró que la actora cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez por lo que condenó a **Colpensiones** a que en el término de dos meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia proceda a reconocer la pensión de vejez a la demandante a partir del **13 de noviembre de 2016**, momento en el que cumplió los 57 años de edad y contaba con el número de semanas exigidas por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, con fecha de disfrute a partir de la desafiliación al Sistema de pensiones, a razón de 13 mesadas anuales. El Ingreso Base de Liquidación se calculará de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 10 de la Ley 797 de 2003.

Esta decisión no la compartió la apoderada de **Colpensiones**, motivo por el cual la recurrieron en los siguientes términos:

Recurso Colpensiones

La apoderada de recurrente solicita que se **revoque parcialmente** la decisión de primera instancia, en lo que respecta a la orden de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, puesto que, respecto de la misma no se agotó la reclamación administrativa no teniendo **Colpensiones** la oportunidad de dar una respuesta directa, por lo que se le está imponiendo una condena, sin la posibilidad de emitir una respuesta de fondo previa reclamación del derecho por parte de su afiliada.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Colpensiones** presentó alegaciones en las que replicó las razones en que fundamentó el recurso de apelación interpuesto.

Por su parte, la apoderada de la actora presentó alegaciones en las que solicitó que se confirme el fallo de primera instancia, toda vez que, el mismo dio aplicación al precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia, conforme con el cual es obligación de los fondos de pensiones al momento de vincular un afiliado entregar información necesaria y transparente y que el no hacerlo genera la ineficacia de la afiliación.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con el recurso de apelación interpuesto y el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Determinar si el acto jurídico que generó la afiliación de la actora al RAIS resulta o no eficaz, (ii) Establecer cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia, (iii) Revisar si operó la prescripción, (iv) Determinar si la juez de primera instancia contaba con competencia para conocer la pretensión encaminada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez y finalmente, (v) Revisar si la señora **Claudia Santacoloma Osorio** cumple con los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión de vejez.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Claudia Santacoloma Osorio** nació el **12 de noviembre de 1959** (02/pág.24).
2. La señora **Santacoloma Osorio** prestó sus servicios a la ESE Hospital de Caldas entre el **14 de febrero de 1984** y el **16 de agosto de 1986**, con una interrupción de 40 días, para un total 125 semanas de tiempo público sin cotizaciones (02/pág.26).

3. Para el **30 de junio de 1994** se afilió al RPM administrado por el **ISS** hoy **Colpensiones**, realizando cotizaciones por un total de 262,86 semanas, hasta el ciclo octubre de 1999 (06/págs.24-25).
4. El día **22 de septiembre de 1999**, la actora suscribió formulario de vinculación a la **AFP Protección S.A.** (02/pág.38), afiliación vigente desde el **1 de noviembre de 1999** (08/pág.45).
5. Según historia laboral expedida por **Protección S.A.** el 3 de agosto de 2021, la señora **Santacoloma Osorio** contaba con 1422,57 semanas cotizadas hasta el ciclo junio de 2021 (08/págs.51-66).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL1688 de 2019, SL4360 de 2019, SL4426 de 2019, SL2611 de 2020, SL2877 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL-755-2022.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS se realizó a través de **Protección S.A.** el día **22 de septiembre de 1999** (02/pág.38), lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia en interpretación del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** sostuvo al contestar que le brindó a la demandante información suficiente, completa y veraz, sin embargo, más allá de esta afirmación no se trajo al proceso prueba de que se entregó a la actora una información necesaria y transparente para la fecha de la suscripción del formulario de afiliación¹, sin que por lo demás la suscripción voluntaria del

¹En lo referente a la aplicación de la carga de la prueba se indicó en sentencia SL-081 de 2021, lo siguiente: “Por tal razón, si la parte actora alude a la ausencia de tal información, como ocurre en este caso, no es de su cargo demostrar tal omisión, pues corresponde a un hecho negativo. Por el contrario, es deber de la AFP traer a juicio los elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de la afiliación, brindó las explicaciones suficientes y veraces sobre las consecuencias, beneficios y desventajas del traslado de régimen pensional. Así, si a la administradora se le adjudica el incumplimiento de su deber profesional y de no actuar con diligencia, entonces incumbe a ésta acreditar que sí atendió tales obligaciones. Además, es la entidad quien se encuentra en mejor posición probatoria para allegar los elementos de prueba requeridos para esclarecer hechos como los que aquí se discuten.”

formulario de afiliación lo exonere de esta carga, pues como lo ha indicado reiteradamente el precedente de la Corte Suprema de Justicia la suscripción de este documento apenas implica que hubo un consentimiento libre de vicios² pero no informado.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que al no demostrar **Protección S.A.** que cumpliera con su deber de informar al momento de la vinculación inicial al RAIS, la consecuencia es que la afiliación efectuada a este fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por lo que se **confirmará** el fallo de primera instancia.

De los efectos de la ineficacia

La Juez de primera instancia como consecuencia de la declaratoria de ineficacia impuso a **Protección S.A.** la obligación de trasladar a **Colpensiones** los saldos de la cuenta de ahorro individual, con los rendimientos financieros, bonos pensionales que se encuentren o no en la cuenta de ahorro individual, el porcentaje cobrado por comisiones, los gastos de administración, las primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima debidamente indexados.

Esta decisión no fue debatida por los apoderados de las partes, por lo que se asume su conocimiento en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor a **Colpensiones**, siendo relevante recordar que, al aplicarse la ineficacia como respuesta jurídica del ordenamiento jurídico por la transgresión de un deber

² Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021.

legal, su implicación es que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto.

En ese orden, es importante hacer énfasis en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que: la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una **ineficacia en sentido estricto**, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.

Siguiendo esta enseñanza la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que las AFP que se beneficiaron de ello trasladen a **Colpensiones**, todos los conceptos que recibieron, puesto que, los mismos serán utilizados para la financiación de la eventual pensión de vejez a la que tenga derecho el demandante.

La forma en que se debe interpretar el artículo 1746 del Código Civil, es bien explicada en la sentencia SL-2877-2020, en la que al respecto se expresó:

De modo que, a juicio de la Corte, si bien no se pueden desconocer las reglas para las restituciones mutuas contempladas en el artículo 1746 del Código Civil, lo trascendente en la declaratoria de ineficacia de un acto jurídico es el restablecimiento de la legalidad que impone la eliminación de los efectos del acto configurado contrario a derecho y permitir, cuando las circunstancias así lo posibiliten, retrotraer las cosas al estado en que estaban como si el negocio no se hubiere celebrado.

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

En virtud de lo expuesto para la Sala es claro que durante el periodo en que la actora estuvo vinculada a la administradora del RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los gastos de administración en su favor, y en ese orden el

restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, porque precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto que no fue recibido como consecuencia del acto declarado ineficaz.

Ahora debe recordarse que la vuelta al estado inicial según lo explicado por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, implica la devolución de los siguientes conceptos recibidos por las AFP del RAIS:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM³.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador⁴.
3. Los **gastos de administración**⁵, concepto consagra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales, primas de seguros del Fogafín y la comisión correspondiente a la AFP por su gestión.

Respecto de las primas del Fogafín, se debe indicar que si bien se conoce que este reaseguro fue eliminado por el artículo 163 de la Ley 1450 de 2011 para las AFP del RAIS, dado que la afiliación de la actora fue anterior a esta norma se dispondrá que en el evento de que las mismas fueran descontadas del 3% del aporte de la afiliada se trasladen con la única finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera del

³Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁴Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁵Se deben asumir por el fondo de pensiones con cargo en su propio patrimonio y de forma indexada. En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

sistema de pensiones por cuanto dicha devolución debe ser plena y con efectos retroactivos⁶.

Finalmente, se debe indicar que tratándose de una declaratoria de ineficacia ello implica que la administradora del RAIS nunca debió recibir el concepto de gastos de administración⁷, y por tanto no puede retener valor alguno que integre el mismo.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁸.

A partir de lo explicado, encuentra la Sala que le asistió razón al juez de primera instancia con respecto a los conceptos que deberán ser trasladados por **Protección S.A. a Colpensiones** motivo por el cual se **confirmará** la decisión de primera instancia, adicionándola en cuanto a la condena impuesta para precisar que la orden trasladar lo cobrado por gastos de administración deberá incluir lo descontado por primas de seguros de invalidez y muerte y primas reaseguro del Fogafín, conceptos que deberán ser indexados al momento de su traslado.

De la devolución del bono pensional a Colpensiones

Conforme con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 100 de 1993, los bonos pensionales constituyen un aporte para conformar el capital que requieren los afiliados del Sistema General de Pensiones para financiar la pensión.

Los bonos tienen varias clasificaciones; importando para el caso que se resuelve el tipo A, que corresponden al afiliado que se traslada del régimen de prima media al régimen de ahorro individual.

Este mecanismo de financiación de la pensión antes de su pago debe surtir varias etapas entre las que se encuentran la emisión, expedición, redención y pago, en el caso estudiado, se desconoce en qué etapa se encuentra el eventual bono, por lo que en el caso de que el mismo haya sido recibido por **Protección**

⁶ Sentencia SL-2877-2020.

⁷ Sentencia SL-4360-2019.

⁸En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

S.A., lo procedente no es su traslado a **Colpensiones**, sino la inmediata restitución a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad proceda con su anulación, por lo que en este aspecto se **revocará** el fallo consultado.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688-2019, SL-3202-2021 y SL-3199-2021.

De la falta de presentación de la reclamación administrativa respecto de la pretensión encaminada al reconocimiento de la pensión de vejez

Se solicita por parte de la apoderada de **Colpensiones** que se declare la falta de competencia para conocer respecto de la pretensión encaminada al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, toda vez que no reposa en el expediente copia de que se radicara reclamación administrativa ante esa entidad que le diera la oportunidad de pronunciarse respecto de la procedencia del derecho, previo su sometimiento a la decisión jurisdiccional.

Con respecto a esta solicitud, advierte la Sala que, si se advirtió por parte de la apoderada recurrente esta irregularidad procesal, bien pudo acudir a las excepciones previas para que la juez a-quo realizara un control de la misma, excluyéndola del litigio, pero no puede pretender una vez dictada sentencia en la que se resolvieron las pretensiones de la demanda, que la misma sea excluida argumentando la existencia de una prerrogativa a la que renunció por su inactividad.

Sobre este aspecto es importante recordar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha trazado un criterio claro y reiterado según el cual cuando el Juez Laboral admite la demanda sin advertir la falta de cumplimiento de la reclamación administrativa le corresponde a la entidad pública demandada de alertar al juzgador sobre esta omisión, mediante la proposición de la excepción previa de falta de competencia, el no hacerlo genera el saneamiento de esta anomalía. En este sentido se expresó en la sentencia SL-2150-2021, lo siguiente:

De entrada, habrá de decirse respecto al cuestionamiento de la opositora sobre la falta de congruencia entre lo que el accionante solicitó en la reclamación administrativa y a lo que persiguió en el trámite ordinario, que la Sala advierte que tal planteamiento es extemporáneo, pues dichas circunstancias las debió alegar en la contestación de la demanda como excepción previa, lo que no ocurrió, de modo que tal anomalía procedimental quedó saneada (CSJ SL1054-2018).

Conforme con lo expresado es evidente que la solicitud de la recurrente resulta extemporánea y en tal sentido no está llamado a prosperar el recurso interpuesto.

Del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez

En este aspecto que se revisa en virtud del grado jurisdiccional de consulta, se debe indicar que la señora **Claudia Santacoloma Osorio** nació el **12 de noviembre de 1959** (02/pág.24), por lo que cumplió 57 años de edad el mismo día y mes del año 2016, sin embargo, para esa fecha no reunía el número de semanas necesario para acceder a la pensión establecido por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, condición a la que arribó el para el mes de noviembre de 2018, cuando acreditó un total de 1300 semanas, debiendo en este aspecto **modificarse** la decisión de primera instancia, declarando que el status de pensionada lo tiene la actora desde el **30 de noviembre de 2018**.

Ahora, en lo referente al eventual disfrute, es claro que el mismo procede una vez acreditado el retiro del sistema, como bien lo señalara la juez a-quo, y como quiera que el caso de autos la historia laboral aportada al proceso da cuenta que con posterioridad a la presentación de la demanda la actora se encontraba realizando cotizaciones al sistema de pensiones (08/págs.51-66), hechos que incluso fue aceptado en el interrogatorio de parte, deberá ser **Colpensiones** quien bajo los parámetros establecidos proceda a liquidar el valor de la mesada pensional, debiéndose **revocar** la orden impuesta en lo referente a que el pago de las eventuales mesadas adeudadas debe realizarse dentro de los 2 meses siguientes a la ejecutoria del fallo, por cuanto para que se proceda con el reconocimiento de la prestación es necesario que la administradora pública haya recibido los recursos para el financiamiento de la misma, por lo que su reconocimiento estará condicionado a que **Colpensiones** reciba los dineros provenientes **Protección S.A.**

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por la Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, el día **29 de noviembre de 2022**, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **CLAUDIA SANTACOLOMA OSORIO** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES, REVOCANDOLA** con respecto a la orden de devolución del bono pensional a **COLPENSIONES**, debiendo **PROTECCIÓN S.A.** en caso de contar con sumas pagadas por este concepto restituirlas a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que esta entidad proceda con su anulación.

SEGUNDO: ADICIONAR el numeral segundo en cuanto a la condena impuesta para precisar que la orden trasladar lo cobrado por gastos de administración deberá incluir lo descontado por primas de seguros de invalidez y muerte y primas reaseguro del Fogafín, conceptos que deberán ser indexados al momento de su traslado.

TERCERO: MODIFICAR y REVOCAR el numeral cuarto de la decisión de primera instancia, que de conformidad con lo expresado en la parte motiva, será del siguiente tenor: **DECLARAR** que la señora **CLAUDIA SANTACOLOMA OSORIO** tiene de derecho a la pensión de vejez consagrada en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 a partir del **30 de noviembre de 2018**, prestación que deberá ser reconocida por **COLPENSIONES** una vez reciba los recursos provenientes de **PROTECCIÓN S.A.**, para lo cual deberá tener como fecha de disfrute aquella en que se efectué el retiro del sistema de pensiones, y como parámetros para la liquidación del Ingreso Base de Liquidación y el monto, los artículos 21 de la Ley 100 de 1993 y el 10 de la Ley 797 de 2003 y deberá pagarla en razón de 13 mesadas por anualidad.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Radicado 05001-31-05-024-2021-00096-01
Radicado Interno: P3562223
Asunto: Confirma, adiciona y revoca sentencia

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-024-2021-00096-01
Radicado Interno: P3562223
Asunto: Confirma, adiciona y revoca sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Claudia Santacoloma Osorio
Demandado (s)	Protección S.A. y Colpensiones
Radicado	05001-31-05-024-2021-00096-01
Decisión	Confirma, adiciona y revoca sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 1 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 1 de marzo de 2023 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO